

ABRIL
2002

BOLETÍN TRIMESTRAL

CEDLA -

PROYECTO

CONTROL

CIUDADANO

BOLIVIA

SEGUNDA ÉPOCA

AÑO 1 - N° 2

control ciudadano



∴ PGN 2001 / EL ESPEJO DE NUESTRA CRISIS FISCAL

∴ DILEMAS DEL SERVICIO / ATENCIÓN EN SALUD EN LA PAZ Y EL ALTO

∴ INFORME 2002 / IMPACTO SOCIAL DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL MUNDO

∴ VICIOS ESTRUCTURALES Y ¿VIRTUDES LOCALES? DINÁMICA DEL DESARROLLO REGIONAL BOLIVIANO



El proceso de desarrollo boliviano cambió, en esencia, en el momento de la adopción de políticas económicas nuevas de corte neoliberal. A partir de 1985, esta nueva orientación de la política se dirige hacia principios de *apertura de mercado*, con regulaciones a su funcionamiento y eliminación de distorsiones; *liberalización de la economía*, vía precios y salarios y flexibilización de tipo de cambio; y la *reforma del Estado* que reduce su rol al desarrollo social y la regulación de la economía, dejando la responsabilidad del crecimiento económico al sector privado.

Las disposiciones de política, definidas básicamente por el Programa de Ajuste Estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han sido enunciadas principalmente en los decretos supremos 21060, 21660 y 22407. Los lineamientos generales se basan en la estabilización económica, salida de la crisis y la reactivación de la economía mediante la 'reconversión productiva'¹, promoviendo el crecimiento económico del país a través de la generación de áreas productivas y de exportación. Al mismo tiempo, se inscriben aspectos como el mejoramiento en las condiciones de vida de la población y la generación de empleo.

Sin embargo, a pesar de la recuperación de la estabilidad macroeconómica y de la implementación de nuevas olas de reformas a mediados de los noventa, los objetivos de reactivación económica y mejoramiento en las condiciones de vida no han sido satisfechos. En los últimos 16 años, Bolivia no ha podido eliminar la dependencia del crecimiento económico en sectores tradicionales a pesar de algunas variaciones en su composición. La evolución de ramas y sectores económicos privilegiados ha impulsado la localización de actividades —flujos migratorios poblacionales y de capitales—, a través de la priorización de acciones y

recursos en determinadas regiones y sectores.

Este tipo de crecimiento polarizado ha generado desigualdades al interior del país, permitiendo el progreso de algunas regiones y el estancamiento de otras. El crecimiento logrado no representa una ilusión integral del país, sino que tiende a marginar regiones, sectores económicos y poblacionales.

LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA REGIONAL

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten efectuar un análisis de 1991 a 1997, periodo caracterizado por el logro de un crecimiento del Producto Interno Bruto a tasas mayores al 4 por ciento. Al analizar la situación regional, se observa una dinámica desbalanceada, presentándose diferentes ritmos de crecimiento económico según departamento.

∴

Cuadro N° 1

ESTRUCTURA DEL PIB POR DEPARTAMENTOS (EN PORCENTAJES)

	1991	1994	1997
Eje Central	71.0	72.2	72.2
La Paz	26.1	26.5	24.7
Santa Cruz	27.3	27.7	29.2
Cochabamba	17.6	17.9	18.3
Adyacentes	29.0	27.8	27.8
Total	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Se distinguen dos grupos: el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y los departamentos adyacentes (Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando). La participación en el crecimiento económico nacional muestra que los departamentos adyacentes no participan en más del 30 por ciento, disminuido en el tiempo, identificándose así tres departamentos como los principales impulsores del crecimiento en Bolivia.

La urgencia de lograr mayor crecimiento económico ha significado la selección de sectores con potencial, lo que invalida el juicio de que el modelo no privilegia sectores o regiones; más aún, genera importantes divergencias económicas regionales. En Bolivia los sectores tradicionales se han constituido en la única opción para la expansión y el crecimiento, por lo que las disposiciones emanadas durante los últimos 16 años han estado dirigidas a incentivarlos, resulta "claro que para los sectores que no están insertos en la lógica de la Política de Ajuste Estructural, las medidas específicas tienen un carácter limitado"².

La distribución territorial del desarrollo se encuentra fuertemente ligada a la composición sectorial del producto. Los cuatro sectores identificados como potenciales para promover el crecimiento son: hidrocarburos, minería, agropecuaria y el sector industrial.

Se observa que los departamentos del eje se ven favorecidos por la posibilidad de desarrollarse en varios de estos sectores. Santa Cruz, por ejemplo, presenta una importante participación en el sector de hidrocarburos, en las actividades agrícolas

así como en la actividad industrial (Gráfico N° 1).

La tradición *minera* de Bolivia cambió. Dicho sector empezó el periodo de desarrollo de mercado (1985) en crisis; estrictas políticas de regulación lograron su recuperación, pero jamás fue capaz de una total reactivación para una exitosa participación en el comercio internacional. Los principales productores son Oruro, Potosí y La Paz, pese al cambio en la estructura de productos.

La aplicada política *agropecuaria* y de desarrollo campesino ha generado un cambio en la estructura sectorial de la actividad nacional, manteniendo producciones tradicionales e introduciendo nuevos productos. Sin embargo, ésta sólo ha favorecido a los departamentos del eje.

Similarmente, el sector *hidrocarburos*, mediante la Ley de Hidrocarburos, logró captar más inversión extranjera para ampliar las reservas, incrementando la producción y constituyéndose hoy en día en la principal actividad económica del país. Santa Cruz, Cochabamba y, en menor escala, Tarija son los principales productores.

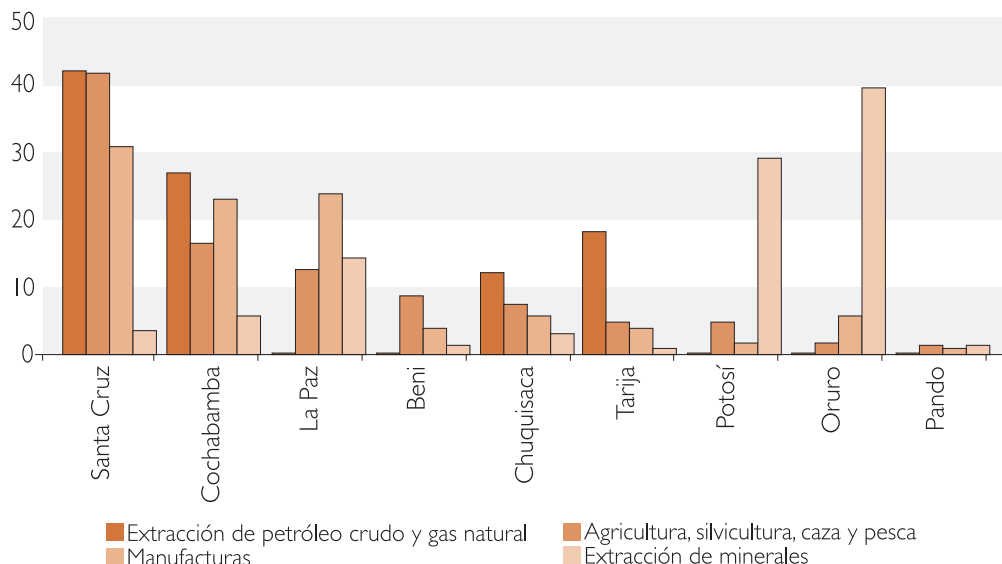
El sector *industrial* no está muy desarrollado en Bolivia, sin embargo son los departamentos del eje los que más se han

desarrollado, los cuales deben desarrollar sus actividades con atrasos tecnológicos, administrativos y productivos.

Se puede fácilmente señalar que las actividades de promoción económica han generado un desigual desarrollo regional, favoreciendo a determinadas actividades económicas; en los últimos años podemos citar al petróleo, gas natural y algunos productos agropecuarios como la soya y sus derivados, así como actividades forestales (madera y castaña). Lastimosamente, existe una localización de estas actividades económicas (se han ido desarrollando principalmente en el Oriente del país). Estas regiones no sólo cuentan con la importante presencia de recursos naturales sino que también han gozado de un fuerte apoyo económico en políticas y recursos.

Si reparamos en los determinantes del desarrollo local —recursos físicos, económicos financieros, técnicos, socioculturales y humanos— podemos evidenciar que gran parte de estas variables no están favorablemente constituidas en el país en su integridad, sobre todo en los departamentos adyacentes, lo cual estaría dificultando el progreso del país (desarrollo económico y social).

Gráfico N° 1
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EN LOS CUATRO PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE BOLIVIA (1997)



Elaboración: CEDLA

Este tipo de crecimiento polarizado ha generado desigualdades al interior del país, permitiendo el progreso de algunas regiones y el estancamiento de otras (...) no representa una ilación integral del país

Cuadro N° 2			
EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO (EN PORCENTAJES)			
	1992	1996	2000
Deptos del eje	42.2	51.7	62.4
La Paz	14.0	18.3	12.5
Cochabamba	6.5	6.1	6.1
Santa Cruz	21.7	27.3	43.8
Deptos adyacentes	57.8	48.3	37.6
Chuquisaca	0.5	0.2	0.2
Oruro	20.8	23.3	17.2
Potosí	21.0	12.3	14.3
Tarija	12.9	8.5	0.5
Beni	1.6	3.1	3.2
Pando	0.1	0.3	1.2
No Especificado	1.0	0.7	1.0
Total	100.0	100.0	100.0

Fuente: Elaboración propia
Nota: Se utilizaron datos del INE / No incluye reexportaciones

PARTICIPACIÓN REGIONAL EN EL MERCADO EXTERNO

Continuando el análisis de la dinámica de desarrollo, se destaca la importancia que han tomado las exportaciones como otro factor determinante del crecimiento en un modelo de mercado abierto. Los departamentos del eje no exhiben una marcada concentración de las exportaciones, pero sí mantienen una participación superior. Santa Cruz presenta una participación considerablemente superior a todos los demás departamentos, cercana al 44 por ciento en el año 2000³. La estructura de sus exportaciones muestra como principales productos: soya y derivados (46 por ciento), gas natural (22 por ciento), madera y manufacturas de madera (3 por ciento) y productos alimenticios (6 por ciento) (Cuadro N° 2).

Notemos que la participación en el comercio internacional de los departamentos de La Paz y Cochabamba es menor a

la de Potosí y Oruro. Esto debido a la condición minera de estos últimos. Potosí provee el 39 por ciento de las exportaciones en este sector; en tanto Oruro el 36 por ciento. En la estructura exportadora de Oruro, se desataca además la industria manufacturera (63 por ciento), nos referimos a una industria minera.

Una situación diferente se presenta en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Pando cuya participación en las exportaciones nacionales no es mayor a 1,2 por ciento cada uno. Beni es la excepción, suministra 3,2 por ciento de las exportaciones debido a su actividad agrícola, fundamentalmente la producción de castaña.

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA REGIONAL

Cifras preliminares del Censo 2001 muestran una tasa de crecimiento poblacional de 2,75 por ciento entre 1992 y 2001, superior a la tasa entre 1976 y 1992. Se observa también una mayor concentración de la población en las áreas urbanas del país. En 1992, el 58 por ciento de la población residía en el área urbana, en 1996 datos estimados arrojan un 60 por ciento y los datos preliminares del 2001 evidencian un porcentaje aún mayor (62,2 por ciento).

Vemos entonces que el proceso de migración campo-ciudad continúa. Éste tiene su origen en la llamada pobreza o subdesarrollo rural, así la migración es más una consecuencia del fenómeno de expulsión del área rural más que de atracción de las urbes. Una de las principales causas económicas es la búsqueda de empleo: en 1999 el 20,2 por ciento migraba por esta razón, en el 2000 la tasa aumentó a 20,7 por ciento. Otra ruta migracional parte de los Andes hacia zonas más bajas, valles y llanos, fundamentalmente hacia Santa Cruz que tanto dinamismo económico ya presentado en los últimos años.

Si analizamos la evolución del producto per cápita, notaremos que Santa Cruz y Oruro llegan a exhibir un PIB per cápita por encima de los 1.000 dólares, este último presentando una tasa de crecimiento de 12 por ciento⁴ explicado fundamentalmente por la extracción de minerales. El PIB per cápita de Tarija también presenta un importante crecimiento, 14 por ciento, debido al aumento de la extracción de petróleo y gas natural.

Por otro lado, se observa que La Paz y Cochabamba, departamentos del eje, presentan cifras menores al promedio total, lo cual podría ser explicado por el tamaño de sus poblaciones, ambas superiores al millón. Sin embargo, estos datos no resultan muy representativos ya que la distribución de la riqueza en Bolivia se encuentra totalmente concentrada en un pequeño grupo de población (Cuadro N° 3).

Esta situación socioeconómica de desigualdad entre departamentos, resultado de un desarrollo (económico) no equitativo, se consolida aún más por las diferencias en las posibilidades de acceso a empleos de los diferentes departamentos (Cuadro N° 4).

En 1989, la tasa de desempleo abierto en cinco de las ciudades capitales de Bolivia presentan tasas mayores al 10 por ciento, con Sucre, Cochabamba y Trinidad como las excepciones. Los datos a nivel departamental y nacional muestran una disminución del desempleo abierto, logrando el más

Cuadro N° 3			
PIB PER CÁPITA SEGÚN DEPARTAMENTO (EN \$US DE 1990)			
	1991	1994	1997
La Paz	611	649	651
Santa Cruz	947	965	1,055
Cochabamba	692	723	778
Oruro	748	852	1,021
Pando	797	846	937
Tarija	803	790	879
Beni	709	675	707
Chuquisaca	650	612	605
Potosí	435	426	435

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

bajo nivel en 1994 (3,14 por ciento). Sin embargo, las cifras vuelven a ascender en el 2000, llegando al 7 por ciento en el primer semestre de ese año y, según estimaciones del CEDLA, a 13,5 por ciento hasta el tercer trimestre de 2001⁵ (Cuadro N°4).

Estos datos reflejan la crisis social, marcada por importantes movilizaciones de distintos sectores sociales. Debido a la permanencia de la recesión económica, se vislumbran para el 2001 tasas de desempleo departamental cercanas a las de 1989, situación que podría permanecer para el año 2002.

El conjunto de datos presentados anteriormente evidencia que el actual modelo de desarrollo basado en una economía de mercado dirigida 'hacia fuera' sólo ha generado desigualdades al interior del país. La debilidad en el enfoque integral de desarrollo local, apoyado por la descentralización, dificulta la dinámica productiva de los municipios pobres. No existen políticas dirigidas a integrar las regiones del país.

Un ejemplo es el Plan Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural, donde las acciones de Estado están dirigidas a apoyar municipios con productos competitivos, dejando a su suerte la agricultura de subsistencia, quienes no representan agentes 'competitivos', pero que, sin embargo, son el 80 por ciento de la población rural⁶.

Además, los intentos de distribución de recursos (coparticipación tributaria, inversión pública y del alivio de la deuda, HIPC II) determinados por el tamaño poblacional, tienden a beneficiar a los departamentos del eje. Y fácilmente se puede prever que para el año 2002 la desigualdad entre departamentos será aún mayor, pues la población de los departamentos del eje sigue en aumento mientras los adyacentes presentan tasas de crecimiento menores.

¿Cuál es entonces el porvenir de las regiones pobres? Las regiones menos favorecidas no poseen generalmente habilidades desarrolladas para competir en el mercado interno, mucho menos en el internacional, deben sostenerse con una infraestructura productiva escasa, capital humano frágil y decreciente, recursos fi-

Cuadro N° 4			
EVOLUCIÓN TASA DE DESEMPLEO ABIERTO CIUDADES CAPITALES (EN PORCENTAJE)			
	1989	1996	1999
Total	10.39	3.53	6.15
Sucre	8.58	3.41	4.40
La Paz	10.95	4.12	7.66
Cochabamba	7.33	3.56	5.41
Oruro	13.21	2.36	7.12
Potosí	13.30	7.29	6.61
Tarija	11.27	4.09	6.40
Santa Cruz	11.15	3.22	5.46
Trinidad	7.32	2.75	4.74
Cobija	-	1.38	4.26
El Alto	10.06	2.89	5.47

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Continua de Hogares (1er. Trimestre de 1999)

nancieros disminuidos por la crisis económica y por el acceso a recursos asignados por el Estado.

En este contexto, es necesario implementar políticas de reactivación productiva en el país en su integridad, poniendo especial atención en regiones y departamentos adyacentes que enfrentan problemas para competir en el libre mercado. De esta manera, se trata de dinamizar sus economías e incidir en el empleo y la migración. El objetivo final sería un desarrollo equilibrado y equitativo tomando en cuenta a todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas.

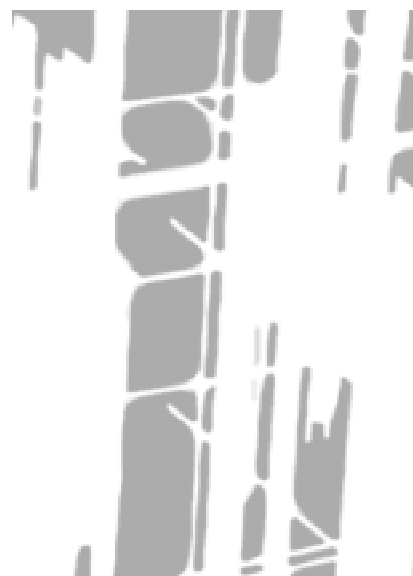
La distribución territorial del desarrollo se encuentra fuertemente ligada a la composición sectorial del producto. Los cuatro sectores identificados como potenciales para promover el crecimiento son: hidrocarburos, minería, agropecuaria y el sector industrial

NOTAS

1 Ver "La Intencionalidad del Ajuste en Bolivia". Programa de Ajuste Estructural N° 3, CEDLA, 1992.

2 Op. Cit.

3 Si consideramos las exportaciones por actividad económica, se evidenciaría que en industria manufacturera, Santa Cruz participa con 50 por ciento del total, en la extracción de minerales e hidrocarburos con el 29 por ciento y 55 por ciento en el caso de la agricultura, ganadería, caza y pesca.



4 Sorprenden los datos de Oruro que representa uno de los departamentos más pobres del país. Esto estaría reflejando la alta concentración de la riqueza.

5 Tasa de desempleo urbano, ver "Evaluación de la Economía Boliviana, Primer Semestre del 2001", Efraín Huanca Quisbert, Documento de trabajo, CEDLA, La Paz - Bolivia.

6 Se propone programas de reconversión de la mano de obra campesina y políticas de asentamiento humano destinadas a ciudades intermedias.

• PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN: EL ESPEJO DE NUESTRA FRAGILIDAD FISCAL

El Presupuesto General de la Nación (PGN), además de ser un instrumento para la administración pública, refleja la política económica que sigue el país. Así, más allá de aspectos cuantitativos vinculados a la recaudación de tributos o a la asignación del gasto público, el PGN debe ser interpretado como un plan económico.

El PGN, al constituirse como un elemento de la política fiscal, tiene grandes implicaciones macroeconómicas que escapan al ámbito puramente fiscal; por este motivo la elaboración del mismo considera un conjunto de variables que responden más a una política monetaria (tipo de cambio, tasas de interés, términos de intercambio e inflación como algunos ejemplos). La proyección en el comportamiento de estas variables dan pautas a la autoridad fiscal y monetaria al momento de elaborar su política: de esta manera, por ejemplo, la restricción fiscal debe contemplar la restricción monetaria para que exista equilibrio en la economía.

Sin embargo, es evidente que en un país como Bolivia —particularmente vulnerable a los shocks externos que inciden en el desenvolvimiento económico del país— se hace difícil estimar el comportamiento de variables macroeconómicas.

Como se podrá notar en el cuadro N° 1, la inflación es la variable que más cerca está a las estimaciones realizadas, cumpliendo así con la política de estabilización de precios que se persigue desde la hiperinflación, la cual, en esencia, constituye una medida recesiva. No obstante, en el 2001 las proyecciones fueron abrumadoramente más altas respecto a lo ocurrido en términos del índice de precios al consumidor. Y es que el nivel de inflación fue reducido, lo cual evidenció un problema de demanda y de reducción en el consumo familiar; esta situación económica fue percibida por los comerciantes, quienes no tuvieron otra opción que ajustar sus precios a los bolsillos de la población.

Esta situación también fue percibida también por empresarios, pues éstos optaron por cortar por el lado más débil de la cuerda —despedir a sus trabajadores o flexibilizar las relaciones laborales de forma ilegal— reduciendo sus costos laborales a costa de los trabajadores. Por tanto, la re-

ducida tasa de inflación no puede ser considerada como positiva.

Por otro lado, se nota la divergencia en las tasas de crecimiento efectiva con las programadas al inicio de la gestión, situación que evidencia la ausencia de un balance de la gestión anterior, que se trasluce en tasas de crecimiento sobredimensionadas.

En la actual gestión, nuevamente se incurre en este hecho, se pretende lograr una tasa de crecimiento entre el 2,5 y 3 por ciento¹; para ello se requiere reactivar el aparato productivo del país, lo que generaría que el nivel de inflación aumente; se estima que la inflación en el 2002 ascendería al 4 por ciento, debido a que se espera que la dinámica productiva cause que el nivel de consumo aumente, incidiendo en los precios.

La intención de alcanzar un nivel de crecimiento incide en la estructura del PGN, ya que, al no cumplirse las estimaciones de crecimiento, genera un impacto negativo en los ingresos genuinos del Estado; esta situación provoca que el nivel de déficit fiscal aumente, teniendo que recurrir nuevamente a una política de financiamiento externo.

INGRESOS VS. GASTOS

El presupuesto consolidado durante los tres últimos años, en promedio, ha significado la puesta en programa de Bs. 25.271 millones, presentando un crecimiento al 2001 de 14 por ciento respecto a la gestión anterior; este porcentaje es superior al ostentado entre 1999 y 2000 (0,02 por ciento).

Pero toda intención de política está relacionada a la capacidad financiera del Estado. La estructura de ingresos del PGN de 2001 está conformada principalmente por las recaudaciones tributarias (que exhibe una participación del 34 por ciento²) y por las regalías y las donaciones corrientes (que, entre el 2000 y 2001, se incrementa en no menos del 60 por ciento). Estos elementos se constituyeron en los principales respaldos de la política económica de la anterior gestión (Cuadro N° 2).

En la década de los noventa, los ingresos tributarios constituidos por renta interna y renta aduanera exhiben, en los ocho primeros años, una tasa de crecimiento promedio de 25 por ciento; a partir de 1998, las recaudaciones mostraron una tasa de crecimiento negativa (-3,5 por ciento), para luego ascender al 10 por ciento. Cifras preliminares al 3er trimestre de 2001 y el informe gubernamental para el Grupo Consultivo XIV —que prevé una caída en las recaudaciones— hacen suponer que las recaudaciones no alcanzarán el 7,5 por ciento de crecimiento programado para la gestión 2001, reduciéndose de esta manera la principal fuente ••

Cuadro N° 1

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS (1999-2001)

	1999		2000		2001	
	Progra.	Ejec.	Progra.	Ejec.	Progra.	Ejec. (*)
Tasa de Crecimiento del PIB	5,2 %	0,44 %	4 a 4,5 %	2,37 %	4,5 %	0,24%(1)
Tipo de cambio (promedio)	5,71	5,84	6,15	6,21	6,59	6,49 (2)
Tasa de inflación (fin de periodo)	5,5 %	4,39 %	4 a 4,5 %	3,41 %	4,5 %	0,92%(3)
PIB nominal (en millones de Bs)	52.720	48.268	54.224	51.261	57.382	-
Déficit Fiscal (en % del PIB nominal)	3,6 %	3,8 %	3,7 %	4 %	3,7 %	8,3%(4)

Fuente: PGN 1999-2000-2001.

Nota: (*) (1) La tasa de crecimiento del PIB es al primer semestre

(2) Tipo de cambio nominal al primer semestre

(3) Inflación acumulada (enero a diciembre de 2001)

(4) Déficit Fiscal al 3er trimestre del 2001, elaboración CEDLA

de ingresos del presupuesto. Dicha situación afecta al gasto público y la intención de reactivar la demanda agregada.

Por este motivo se ha decidido disminuir el gasto corriente y paralelamente incrementar los ingresos tributarios. Este objetivo se pretende alcanzar con la reforma del código tributario, apostando a incrementar la recaudación con el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEHD), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT); estos tres impuestos se constituirían en los pilares para el incremento en los ingresos tributarios para la presente gestión.

Sin embargo, la relación directa que existe entre la actividad económica y los niveles de recaudación tributaria dan cuenta de una posible moratoria en los pagos de distintos impuestos. Como ejemplo más ilustrativo está el caso de los empresarios que demandaron al gobierno la reducción

...se nota la divergencia en las tasas de crecimiento efectiva con las programadas al inicio de la gestión, situación que evidencia la ausencia de un balance de la gestión anterior.

del IVA de 13 a 10 por ciento y la eliminación del IT; estas medidas supuestamente ayudarían al sector privado a superar la crisis, no obstante significarían una reducción en los ingresos del Estado, lo cual repercutiría negativamente en los niveles de inversión pública.

Quedan las regalías y las donaciones corrientes; éstas posiblemente cumplirían con la meta establecida en el PGN de 2001, pero la participación de estas partidas en la estructura de ingresos no supera el 6 por ciento.

Esta situación de caída de ingresos no necesariamente significa una caída en los gastos. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian un aumento del gasto en el Gobierno General en un 13 por ciento y una caída de los ingresos de -0,03 por ciento. Sin duda es el tamaño del sector público el que determina la principal fuente de egresos que son los servicios personales (sueldo y salarios).

Por el lado del gasto, se evidencian problemas que no tienden a solucionarse; uno

INGRESOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) (EN MILLONES DE BS)								
	1990	1992	1994	1996	1998	1999	2000	2001*
Ingresos Tributarios	1,056.4	1,939.9	2,865.9	4,308.7	6,574.7	6,347.6	6,981.9	5,181.6
Renta Interna	868	1,688	2,495	3,853	5,859	5,718	6,329	4,764
Renta Aduanera	189	252	371	456	715	629	653	417

Fuente: Unidad de Programación Fiscal (UPF), Ministerio de Hacienda.
Nota: * Cifras preliminares al 3er Trimestre del 2001

de ellos es el pago de la deuda externa, recursos que para Bolivia han significado la principal fuente de financiamiento de las políticas de Estado. A este problema se suma también el gasto en seguridad social, que generó un incremento en el gasto público (gasto en pensiones), causando un aumento en el déficit fiscal (Cuadro N° 3).

no constituye una opción de corto plazo, a largo plazo significa un peso sobre las cuentas fiscales. A esto se suma las condiciones que los organismos multilaterales ponen para obtener tales empréstitos.

La actitud de los países en desarrollo, frente a la situación de sobreendeudamiento, es la espera a programas de condonación para saldar sus deudas, situación que no soluciona la intervención de organismos multilaterales en la política económica del país.

El mayor gasto y menor ingreso se explicita en un déficit elevado. En la gestión 2000, el déficit fiscal asciende a Bs. 2.125,7 millones³, financiado en un 57 por ciento por recursos externos y en restante 43 por ciento por recursos internos. Al tercer trimestre de 2001, el déficit superó las previsiones del gobierno, exhibiendo la cifra de 8,3 por ciento respecto al PIB. La principal fuente de financiamiento fue el crédito interno⁴ (Letras, bonos del tesoro y prestamos de las AFP's), lo cual mostró una recomposición del financiamiento.

Datos del INE exhiben que el déficit del gobierno general está siendo financiado,

DÉFICIT CRECIENTES

Si observamos el Cuadro N° 3, notaremos que a partir de 1997 el gasto en pensiones incrementa el déficit fiscal, teniendo que recurrir a los recursos externos e internos para su financiamiento. A la luz de los datos, el primero se constituye en la principal opción, debido a que no incide mucho en el comportamiento de las variables macroeconómicas como sucede cuando se incrementa la deuda interna; si bien el endeudamiento exter-

DÉFICIT DEL SPNF EN PORCENTAJES DEL PIB							
	1990	1993	1996	1997	1998	1999	2000
Déficit sin pensiones	-4.4	-6.1	-1.9	-0.8	-0.7	0.3	0.4
Déficit con pensiones	-4.4	-6.1	-1.9	-3.3	-4.7	-3.8	-4.0
Financiamiento	4.4	6.1	1.9	3.3	4.7	3.8	4
Crédito Externo Neto	2.4	5.0	2.5	2.7	2.8	2.3	2.3
Crédito Interno Neto	1.9	1	-0.6	0.5	1.9	1.5	1.7

Fuente: Unidad de Programación Fiscal (UPF), Dossier Estadístico Vol III, 1990-2000.

Al tercer trimestre de 2001, el déficit superó las previsiones del gobierno, exhibiendo la cifra de 8,3 por ciento respecto al PIB. La principal fuente de financiamiento fue el crédito interno (Letras, bonos del tesoro y prestamos de las AFP's).

en alrededor del 90 por ciento, con crédito interno neto. Respecto a la gestión anterior, este tipo de financiamiento se incrementó en 160 por ciento; esta situación no podría sostenerse para el próximo año, debido a las implicancias en la política fiscal y monetaria del país, constituyéndose la deuda externa en la opción principal de financiamiento para el 2002 (Cuadro N° 4).

ODA AL ENDEUDAMIENTO

El pago de la deuda externa, a partir de la crisis de los ochenta, fue un dolor de cabeza para el Estado; sin embargo, es evidente que, para los países en desarrollo, el endeudamiento externo es una de las principales fuentes de financiamiento del déficit fiscal. En el año 2001, el pago de intereses de la deuda externa se incrementó en un 11 por

Cuadro N° 4			
AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (2001) (EN MILES DE BS)			
	Programado	Reprogramado	Variación
Amortización DPECP	6.992	6.992	0
Amortización DPELP	1.058.997	838.493	-220.504
Total Amortizaciones	1.065.989	845.485	
Pago de Intereses DPECP	2.757	3.274	517
Pago de Intereses IDPELP	589.375	667.366	77.991
Total Pago de Intereses	592.132	670.640	
Total General	1.658.121	1.516.126	
PIB nominal	57.382.000	57.382.000	
%	2,9	2,6	

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Nota: DPECP = Deuda Pública Externa de Corto Plazo.
DPELP = Deuda Pública Externa de Largo Plazo.

ciento respecto al año anterior; en cambio, el pago de amortizaciones disminuyó en 0,6 por ciento. Esta tendencia es la misma si observamos los datos de reprogramación del presupuesto de 2001, en el que la disminución en las amortizaciones se explica por la caída en el

pago de la deuda a largo plazo, en cambio el pago de intereses aumenta en casi Bs. 78 millones. Esta situación contable no beneficia a la estructura de gastos, además muestra la crisis financiera del Estado al no poder cancelar el capital de la deuda.

El contexto de 2001, ingresos reducidos, mayores gastos y un crecimiento ínfimo impiden el cumplimiento de las metas de política económica y social trazadas para esta gestión. Esta situación reflejará mayores niveles de pobreza. Asimismo, la urgencia de inyectar recursos a la economía para reactivar la demanda agregada, la implementación de políticas económicas y sociales y cubrir el déficit fiscal programado para la presente gestión, tendrán como resultado un incremento en la deuda externa.

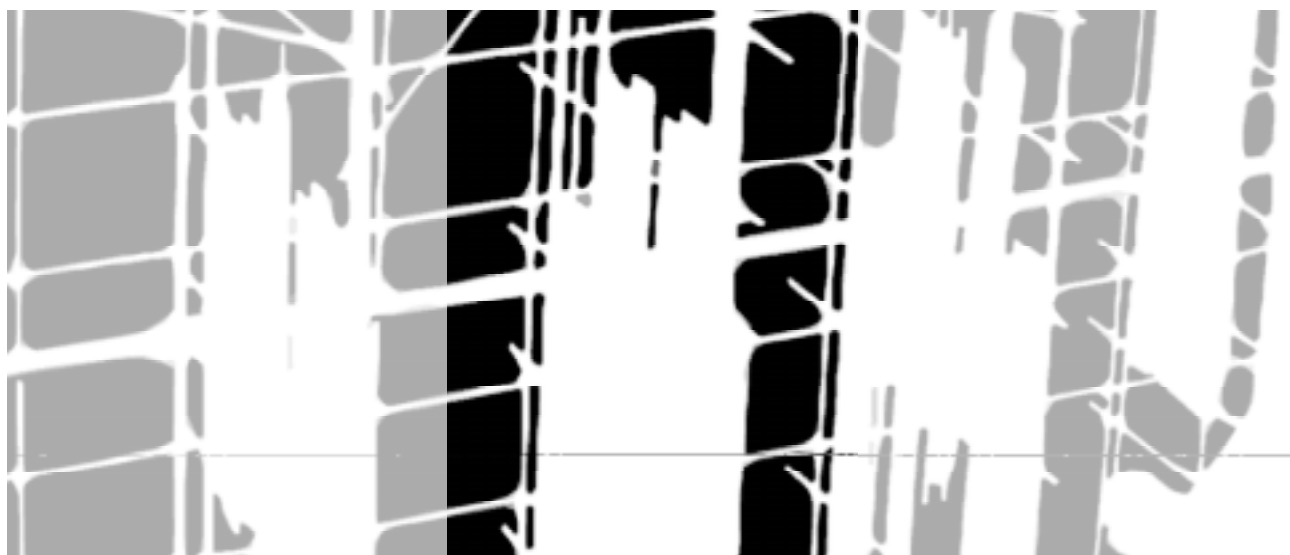
NOTAS

1 Al igual que en el 2001 existe una sobreestimación de la tasa de crecimiento del PIB; según estimaciones realizadas por la CEPAL la economía boliviana no crecerá más del 1,5%.

2 Las recaudaciones tributarias entre 1999 y 2001 presentan en promedio una participación del 32 por ciento.

3 Información de la Unidad de Programación Fiscal (UPF).

4 Ver "la Economía Boliviana en el 2001", Efraín Huanca Quisbert, de CEDLA



∴ UNA VISIÓN DESDE EL EMPLEO

SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA PAZ Y EL ALTO

A principios de la década del noventa, el enfoque de crecimiento basado en el capital humano¹ situó al hombre como el principal generador e impulsor del desarrollo económico; en este enfoque el incremento de la capacidad productiva del hombre tiene un efecto directo en las tasas de crecimiento.

A partir de la orientación del capital humano, todo gasto en salud, educación y/o vivienda es una inversión y, como tal, debe generar beneficios que deben traducirse en desarrollo económico; no obstante, con este planteamiento el gasto social únicamente se justifica en la población que está inserta en sectores productivos y competitivos, por lo que podría concluirse que esta visión no favorece necesariamente a la población más pobre.

Con una perspectiva más integral se plantea un nuevo enfoque, el de desarrollo humano, que concibe que todo gasto social debe beneficiar a toda la población sin importar que la persona sea productiva o no. De esta manera, se modifica el concepto de capacidad productiva por

el de capacidad humana que busca generar equilibrio social y solucionar los trastornos e inequidades sociales del modelo económico. Así, las inversiones en el sector social, además de incrementar la productividad, debe mejorar el bienestar de las personas, constituyéndose en un fin en sí mismo.

En el caso de salud, el enfoque del capital humano mide la eficiencia del gasto según el rendimiento del trabajador en sus labores, mientras que el enfoque de desarrollo humano se concentra en el estado de salud de la población reflejado en un conjunto de indicadores².

Desde una visión crítica de los anteriores enfoques, la salud debiera entenderse como "un complejo biológico, ecológico y sociológico, individual y colectivo, (...) que involucra al todo social, en el que se produce y reproduce la vitalidad humana y colectiva"³. Así, este proceso involucra

aspectos económicos, culturales, políticos, sociales y naturales.

A partir de esta definición, asegurar el acceso a la atención en salud y lograr un buen estado de salud de la población es el resultado de un complejo conjunto de factores. Uno de ellos es el trabajo, situación ocupacional que posibilita un seguro de salud al trabajador y su familia.

y alteña no tiene un seguro de salud, sea éste público o privado. Si observamos el caso particular de El Alto, esta situación es más aguda todavía pues la población no asegurada alcanza al 80 por ciento de la población.

De la población que está afiliada a algún seguro, gran parte accede al servicio público por su bajo costo. El contingente de población que no tiene un seguro de salud evidencia la ausencia y abandono del Estado, pues no hace nada para que se cumpla el derecho de las personas de acceder a la atención en salud.

Cuadro N° 1

ESTADO DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN PACEÑA Y ALTEÑA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (EN PORCENTAJES)

	La Paz		El Alto	
	Ocupado	Desocupado	Ocupado	Desocupado
Afiliado	33	30	21	10
No afiliado	67	70	79	90
Total	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta ECEDLA 2000.
Nota: Población de 10 años y más.

Atención en salud según condición de actividad

El mantenimiento de la fuerza productiva del trabajador requiere que éste dispongan de buena salud que contribuiría positivamente a su rendimiento. Aquellos trabajadores que no tienen un seguro de salud tienen una mayor probabilidad de que se reduzca

su capacidad productiva, pues, en el largo plazo, la ausencia de atención de alguna enfermedad trae complicaciones afectando el rendimiento en sus actividades.

En general, se puede señalar que la tendencia es a una ausencia de atención de salud en los trabajadores por la escasa afiliación a la seguridad social de corto plazo. En el mercado laboral de La Paz y El Alto, podemos identificar las siguientes peculiaridades que aparecen en el cuadro N°1.

En La Paz y El Alto, no más del 33 por ciento de la población ocupada tiene un seguro de salud; por tanto, una gran pro-

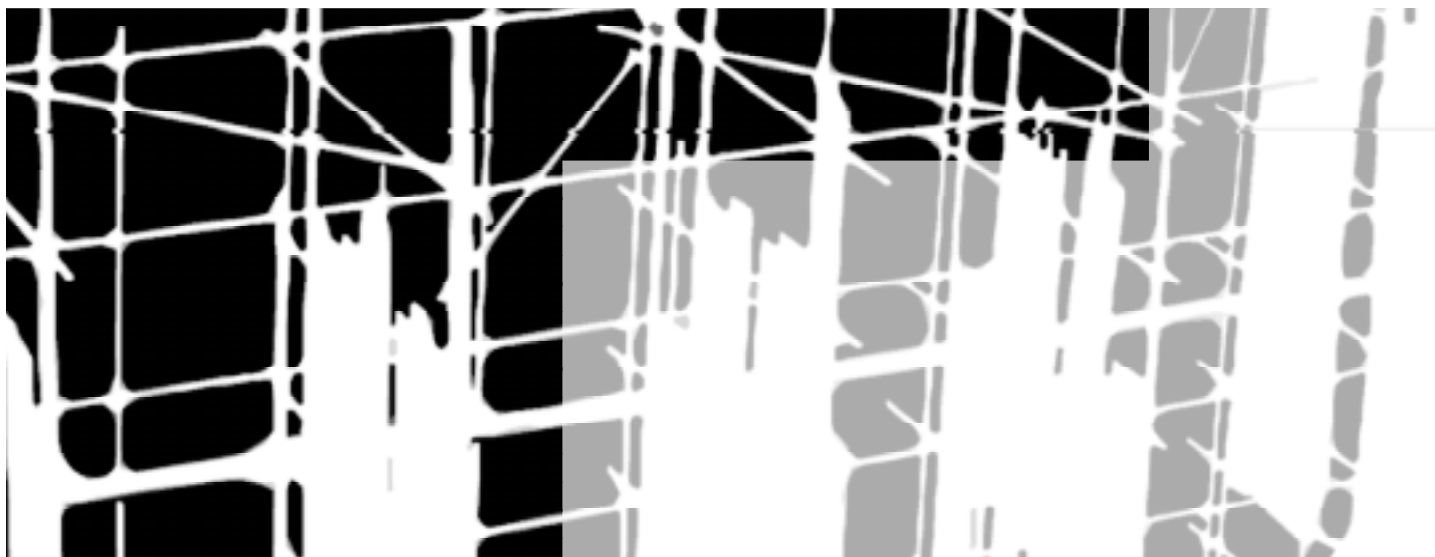
Como veremos en este trabajo, varios de estos factores relacionados con el trabajo de la gente que permiten el funcionamiento de la seguridad social no funcionan de manera adecuada o son prácticamente inexistentes, lo cual reafirma las condiciones de flexibilidad a las que están sujetos los trabajadores⁴.

¿CÓMO ESTÁ LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA PAZ Y EL ALTO?⁵

Cobertura de afiliación al seguro de salud en La Paz y El Alto

Más de la mitad de la población paceña

la salud debiera entenderse como "un complejo biológico, ecológico y sociológico, individual y colectivo, (...) que involucra al todo social, en el que se produce y reproduce la vitalidad humana y colectiva"



porción de la población no recibe esta prestación social: en La Paz el 67 por ciento y en El Alto el 79 por ciento.

Si observamos esta situación por sectores (Gráfico N°1 y N°2), notaremos que una gran proporción de los trabajadores del sector empresarial y semiempresarial no tiene un seguro de salud, situación acentuada en El Alto (no menos del 82 por ciento de los trabajadores no tienen este beneficio social en ambos sectores).

Se observa al interior de cada sector que la mayoría de los trabajadores que no tienen este seguro son asalariados: en el sector empresarial, el 96 por ciento en El Alto y el 89 por ciento en La Paz; en el sector semiempresarial el 75 por ciento y 68 por ciento en La Paz y El Alto, respectivamente. Si se desagrega esta información por cate-

goría ocupacional en el sector empresarial, evidenciaremos que en El Alto el 62 por ciento y en La Paz el 34 por ciento de los no afiliados son obreros. Esto reafirma la tendencia en el sector empresarial de reducir costos laborales, privando a los trabajadores de ejercer su derecho a la salud.

Los sectores doméstico y familiar evidencian condiciones aún más precarias que los anteriores: en promedio en ambas ciudades alrededor del 90 por ciento de la población no está afiliada.

En el sector estatal el 86 por ciento de los trabajadores tiene un seguro de salud, mientras que el 14 por ciento restante sin afiliación —todos en la categoría ocupacional de empleados— presta servicios temporales en actividades conocidas como consultorías.

En ambas ciudades, la población ocupada de 15 a 39 años de edad —en la que la fuerza productiva del trabajador es plena— que no tiene un seguro de salud tiene la siguiente distribución:

- En La Paz el 24 por ciento trabaja en la industria extractiva, construcción e industria manufacturera, el 1,8 por ciento son trabajadores agropecuarios y el 30 por ciento son trabajadores no calificados.
- En El Alto la tendencia es similar, con una mayor participación de trabajadores en la industria extractiva, manufacturera y construcción (33,4 por ciento).

Como se podrá notar, gran parte de este grupo de trabajadores realizan trabajos de alta exigencia física, razón por la cual existe una mayor probabilidad de tener accidentes o enfermedades que mermaría el uso de la fuerza productiva del trabajador.

Como se pudo observar, la obtención de un seguro de salud está muy relacionado con el trabajo. En ambas ciudades, del contingente de población que tiene un seguro de salud, más del 90 por ciento tiene una fuente laboral, en tanto que existe un contingente reducido de desempleados que evidencian tener un seguro de salud: en La Paz de este contingente de población (6,5 por ciento), el 79 por ciento son cesantes⁶ y el 21 por ciento son trabajadores aspirantes⁷. Se puede inferir que el conjunto de población cesante o hace uso de sus ahorros para mante-

Cuadro N° 2

ESTADO DE AFILIACIÓN SEGÚN SALARIO MÍNIMO NACIONAL

	El Alto			La Paz		
	Afiliado (%)	No Afiliado (%)	Total	Afiliado (%)	No Afiliado (%)	Total
Medio SMN	18.7	81.3	26.666	27.3	72.7	22.493
Medio a 1 SMN	14.1	85.9	40.061	13.9	86.1	58.926
1 a 2 SMN	20.6	79.4	92.083	22.5	77.5	94.451
2 a 3 SMN	21.5	78.5	46.457	30.8	69.2	53.667
3 a 4 SMN	31.5	68.5	20.849	35.3	64.7	33.712
Más de 4 SMN	40.7	59.3	24.475	65.8	34.2	77.035
Total	22.4	77.6	250.591	33.7	66.3	340.284

Nota: Población de 10 años y más.
Fuente: ECEDLA 2000

ner el seguro de salud o simplemente prescindir de la atención médica, en tanto que los aspirantes podrían recibir el apoyo de los familiares para obtener este servicio o también prescindir de él.

Seguro de salud y los ingresos laborales

Si la persona, dentro de sus decisiones de acceder al servicio privado o público, antepone características de calidad y oportunidad en la atención médica, las mismas están determinadas en última instancia por su capacidad económica (Cuadro N° 2).

Si relacionamos el salario de la población ocupada versus el salario mínimo nacional (SMN)⁸, se apreciará que la población de La Paz que obtiene más de Bs. 1420 (4 SMN), el 66 por ciento está afiliado a algún seguro de salud, en contraste con el 41 por ciento de El Alto. En tanto que el contingente de población que percibe menos de 4 SMN, en su mayoría no tiene un seguro de salud: por ejemplo, en ambas ciudades, más del 85 por ciento de la población que percibe entre Bs. 177 a Bs. 355 no tiene esta prestación social (Cuadro N°2).

Es decir, una vez deducidos gastos de alimentación y otros servicios básicos necesarios, la población no tiene los recursos como para cancelar la afiliación a algún seguro de salud; si a esto sumamos el trámite burocrático para acceder por lo menos al servicio público, se explica el reducido número de afiliados a esta prestación social.

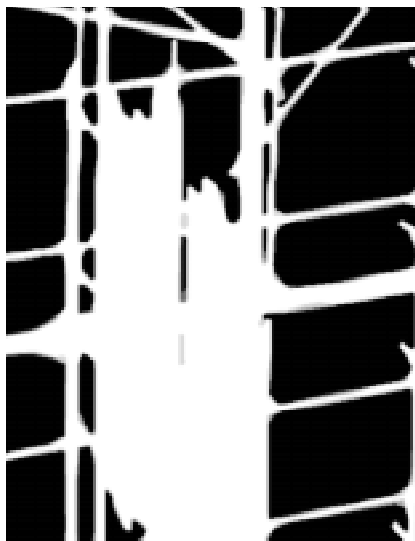
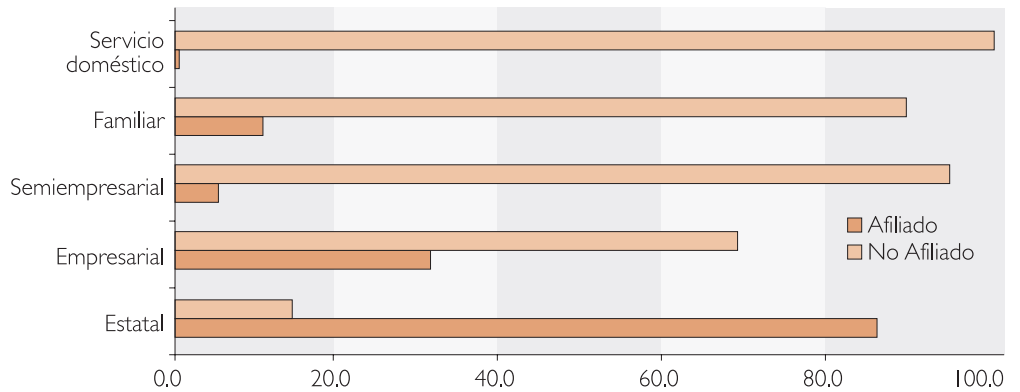


Gráfico N° 2
ESTADO DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE LA CIUDAD DE EL ALTO SEGÚN SECTOR DEL MERCADO DE TRABAJO



Fuente: CEDLA 2000

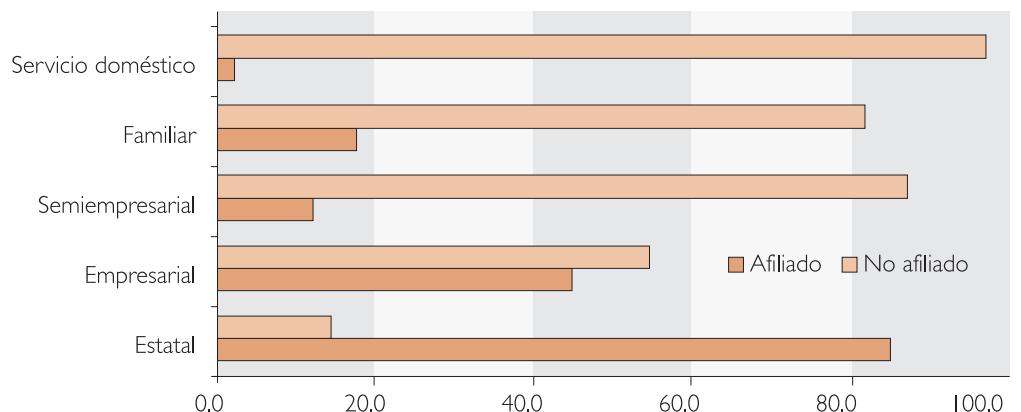
Si bien existen normas que aseguran que el trabajador tenga atención en salud, la información refleja que gran parte de los empleadores "desconocen" de su existencia, dejando desprotegida a esta población. Esta situación se agrava aún más, cuando consideramos a los trabajadores del sector informal.

Universalizar la atención en salud en el país pasa por generar cambios en el empleo; es evidente que el gasto en el sector salud debe ir acompañado también por políticas dirigidas a adecuar el entorno en el que se desarrolla el individuo, nos referimos a elementos como la educación y vivienda, sin dejar de lado los factores culturales, biológicos, naturales. Todos ellos inciden en el estado de salud de la población.

NOTAS

- 1 Teoría elaborada por economistas como Paul Romer y Robert Lucas, llamada también enfoque de Desarrollo de los Recursos Humanos, en la que el hombre es un insumo productivo más (Ver PNUD 1996).
- 2 Tasas de mortalidad materna e infantil, natalidad, desnutrición, tasas de vacunación, etc
- 3Ver "Las Reformas Neoliberales del Sistemas de Salud", Dr. Ramón Granados Toraño
- 4 Esta situación contradice los derechos fundamentales que tiene toda persona a la atención en salud, establecidos en la Constitución Política del Estado (ver artículos 7 y 158) y en la Ley General del Trabajo.
- 5 Los datos consignados en este trabajo pertenecen a la Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida ECEDLA 2000, aplicada en mayo de 2000.
- 6 Personas que no tienen trabajo y lo buscan activamente en un periodo de referencia y tuvieron experiencia de trabajo previa.
- 7 Personas que no tienen trabajo y lo buscan activamente en un periodo de referencia, por primera vez.
- 8 El salario mínimo nacional en la aplicación de la encuesta es de 355 bolivianos (SMN).

Gráfico N° 1
ESTADO DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE LA CIUDAD DE LA PAZ SEGÚN SECTOR DEL MERCADO DE TRABAJO



Fuente: CEDLA 2000

EDITORIAL

Una farsa llamada “Consenso de Monterrey”

La Conferencia Internacional organizada por Naciones Unidas en Monterrey entre el 18 y 22 de marzo tenía el objetivo de analizar la forma de la financiación para el desarrollo. El documento oficial de dicha conferencia especifica como objetivo último sentar las bases para “erradicar la pobreza, lograr un crecimiento económico sostenido y promover un desarrollo sostenible al tiempo que se avance hacia un sistema económico mundial basado en la equidad y que incluya a todos”.

No obstante, una lectura atenta del llamado “Consenso de Monterrey” deja claro que éste no es más que una versión actualizada del Consenso de Washington que el gobierno estadounidense elaboró en 1989 para enfrentar la crisis de la deuda de los países latinoamericanos. En el documento de Monterrey está plasmada la integralidad del programa neoliberal: más libre comercio, más inversiones privadas, privatización y políticas macroeconómicas racionales. Los signatarios aceptan que se deben estimular las inversiones extranjeras directas como un elemento central en la promoción del desarrollo, lo cual parece responder más a las exigencias de las grandes empresas transnacionales por mejorar el clima para sus inversiones que a la necesidad de servicios, recursos y capitales por parte de poblaciones pobres.

Hasta el momento no se admite el fracaso de los programas de ajuste estructural. No se sacan experiencias consistentes de los efectos de las políticas de desarrollo anteriores (inequidades, pobreza, brechas crecientes), ni de las crisis financieras recientes. Se renuncia, de entrada, a la posibilidad de superar un modelo neoliberal basado en los equilibrios económicos, nueva deuda y sus efectos empobrecedores para la mayor parte de los países del mundo.

Así, el llamado ‘Consenso de Monterrey’ no es más que un documento dictado por grandes poderes económicos mundiales y avalado por más de 50 jefes de Estado. Desgraciadamente, la mayoría de los políticos tercermundistas no se atreve a plantear siquiera las causas de su miseria actual, “repitiendo evangélicamente, como los muchachos de un coro eclesíástico, las notas que la voz cantante les dicta”¹.

Pero no sólo las delegaciones oficiales de los países pobres no tienen poder de decisión alguno; sino que la sociedad civil, representada en la Conferencia por más de 800 ONGs, no ha logrado incorporar la consideración de sus demandas y propuestas.

En reuniones preparatorias se identificaron puntos importantes para el debate: la deuda externa o una transferencia de recursos de países pobres a ricos; el impuesto a la especulación monetaria, la Tasa Tobin es de 0,1 por ciento sobre los movimientos especulativos; y la carrera armamentista.

De esta manera, los que participaron en el evento estuvieron lejos del debate y de acercarse a un consenso. Se podría definir a éste como un acto unilateral al que los demás se someten, como bien lo dijo Castro ‘un consenso que se nos impone por los amos del mundo’.

Tres puntos destacados como logros de la Conferencia son un poco más de lo mismo: el compromiso de Estados Unidos en dedicar 5 mil millones de dólares en tres años para el desarrollo de los países pobres (monto igual al que gasta en 5 meses en su guerra contra el terrorismo); la ratificación del compromiso de los países europeos en otorgar el 0.7 por ciento de sus PNB (compromiso que hace muchos años viene siendo incumplido) y la incorporación de la ONU al proceso de construcción de la gobernabilidad económica mundial (¿estará dispuesta a cuestionar la estructura misma y las relaciones de poder del actual sistema económico mundial?).

¹ Heinz Dietrich Steffan en su artículo “Monterrey: la voz de la dignidad”, 23/3/02.

Se podría definir a éste como un acto unilateral al que los demás se someten...



control ciudadano

EDICIÓN: GUSTAVO LUNA, CARLOS ARCE Y CECILIA RAMOS /
ELABORACIÓN: JUAN LUIS ESPADA /
DISEÑO: RUBÉN SALINAS /

cedla

TELEFOS: 591 (02) 2412429. FAX: 591 02 2414625.
CASILLA 8630 LA PAZ, BOLIVIA
CEDLA@CAOBA.ENTELNET.BO -
WWW.CEDLA.ORG
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

• INFORME SOCIAL WATCH 2002

EL IMPACTO SOCIAL DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL MUNDO

La iniciativa Social Watch (Control Ciudadano) aprovechó el Foro Global de ONGs en Monterrey para el lanzamiento de su informe de progreso 2002. En dicho Foro se reunieron más de 2500 ONGs del mundo entero para elaborar un documento conjunto de propuesta y posición que fue presentado en la Conferencia Oficial de Financiación al Desarrollo.

El informe Social Watch se consideró de gran utilidad el momento de analizar el progreso internacional hacia compromisos y metas del desarrollo, pues enfocó la discusión en aquellos aspectos problemáticos de la globalización que no permiten alcanzar un orden económico y social equitativo y justo.

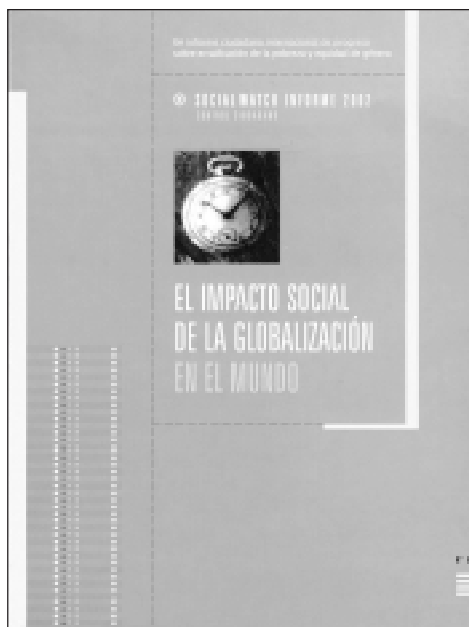
EL OBJETIVO

El objetivo de la iniciativa Social Watch es permitir que la población en su conjunto pueda hacer seguimiento de las acciones de los gobiernos relacionadas con los compromisos adquiridos —en las cumbres mundiales de Copenhague y Beijing de 1995— de erradicar la pobreza mundial y alcanzar la equidad de género. De esta manera, cada año, se analiza qué han hecho los gobiernos y se informa qué se ha alcanzado y qué no.

El informe examina la evolución de la brecha de género en el mundo, la distribución del gasto público y las tendencias recientes en la asistencia al desarrollo. Cada uno de los informes de país estudia el progreso hacia las metas internacionales de desarrollo social y refiere políticas públicas necesarias para combatir la pobreza a nivel nacional.

MUCHOS POBRES, POCOS MUY RICOS

Eliminar la pobreza no es una labor sencilla, ya que más de la mitad de la humanidad es pobre, con mujeres, niños y niñas como una desproporcionada mayoría. La lucha futura parece abrumadora, a pesar de que los recursos necesarios sean abundantes, pues como señala el informe "(...)



alimentar y educar adecuadamente a cada niño y niña y ofrecer servicios de salud a cada madre exigiría sólo un porcentaje menor de las fortunas personales de un puñado de los hombres más ricos (hay pocas mujeres en la lista) de este planeta".

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

El informe Social Watch es un documento interesante que permite una visión global de la situación de desarrollo actual, el cumplimiento de compromisos y los es-

fuerzos realizados, al mismo tiempo, visiones particulares de cada país. La comparación internacional sirve para discernir puntos favorables en cada situación particular y conocer experiencias de otros. Se descubren muchas similitudes, pero también diferencias de las cuales se puede aprender y es el resultado del esfuerzo de coaliciones de ciudadanos de más de 40 países.

Este informe presenta indicadores de seguimiento elaborados en base a las metas de desarrollo comprometidas, artículos temáticos de reflexión y 48 informes nacionales. Los indicadores analizados en tablas se refieren al progreso hacia las metas, avances y retrocesos, analizando su comportamiento desde 1990. Los indicadores estrechamente ligados a las metas propuestas de reducción de pobreza analizan la educación y salud básica, y el acceso a servicios de salud, saneamiento y agua potable.

Se analiza también la evolución de la brecha de género, sobre todo en los ámbitos de educación y empleo. El gasto público, en educación, salud, defensa y servicio de la deuda. Finalmente se presentan la adhesión de los países a los tratados internacionales mencionados en la Declaración del Milenio, acuerdos internacionales clave y los convenios de la OIT.

En los informes temáticos se analizan estrategias antipobreza y la necesidad de su apropiación por parte de los países, se iluminan puntos oscuros del sistema financiero, se tocan temas específicos como mujeres y la globalización, intolerancia y racismo. El informe viene acompañado además de un planisferio sobre la pobreza y la distribución de la riqueza.

Finalmente, el informe brinda direcciones importantes de fuentes y recursos de información, así como algunos recursos de ONGs internacionales.

... alimentar y educar adecuadamente a cada niño y niña y ofrecer servicios de salud a cada madre exigiría sólo un porcentaje menor de las fortunas personales de un puñado de los hombres más ricos (hay pocas mujeres en la lista) de este planeta